



## **INFORME DEL XV PLENO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCE**

En el 44 aniversario de la matanza de Atocha, el PCE rinde homenaje a todas las personas asesinadas y heridas en el despacho de la calle Atocha de Madrid el 24 de enero de 1977, camaradas, compañeros y compañeras del PCE y de las Comisiones Obreras.

Los abogados laboristas Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal, todos asesinados. Así como Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz.

Siempre presentes y en nuestra memoria.

### **I.- Situación Internacional**

El asalto al Capitolio estadounidense, instigado por Trump, ha sido el cierre de una presidencia marcada por la radicalización de la derecha norteamericana, años de mentiras y de incitación al odio, abusos de poder y policiales, políticas criminales respecto a las minorías y soberbia y arrogancia ante el resto del mundo.

El intento violento de paralizar el nombramiento de Biden como nuevo presidente del país ocupando el Congreso ha causado la muerte de cuatro personas, con Washington en estado de emergencia y el país inmerso en la catástrofe de la pandemia. La indudable responsabilidad de Trump en el asalto, su desdén y su trastornada agresividad, son reveladoras del carácter neofascista de su magistratura, de su falta de respeto a las normas constitucionales y de su inclinación a actos de fuerza para imponer su voluntad.

Los asaltantes del Capitolio, como muchos de los seguidores de Trump, son una mezcla de trabajadores blancos afectados por la globalización económica, de nacionalistas insatisfechos, de racistas partidarios de la segregación, de enloquecidos seguidores de QAnon, de ciudadanos temerosos de que la inmigración les arrebatase derechos y puestos de trabajo; una amalgama que también incluye a la extrema derecha, a matones de los Proud Boys, a portadores de banderas esclavistas, de evangelistas furiosos, de militantes de la Asociación Nacional del Rifle, a propietarios agrícolas, especuladores y la burguesía angustiada ante un nuevo mundo donde Estados Unidos no pueda imponer sus condiciones, y que globalmente componen buena parte de la población norteamericana.

La gravedad del ataque al Congreso va acompañada de una crisis en el Partido Republicano, fracturado por el ataque y por la deriva y el fanatismo del presidente saliente. Pero las semillas del odio, la intolerancia, y el fanatismo, están sembradas y han arraigado en millones de estadounidenses a la vez que se han expandido por el mundo dando alas a una nueva extrema derecha que consigue movilizar política y electoralmente a importantes sectores sociales. Una amenaza en general para la democracia y en particular para los proyectos de la izquierda transformadora en todo el mundo.

Estados Unidos contempla ahora las consecuencias de una política que ha aplicado durante décadas fuera de sus fronteras: las campañas de descrédito y manipulación contra los adversarios y el cuestionamiento de procesos electorales, negándose a reconocer triunfos en las urnas cuando no correspondían a sus intereses, y organizando golpes de Estado y operativos para derribar gobiernos legítimos.

La internacional de extrema derecha que se ha agrupado alrededor de Trump -Bolsonaro, Modi, Netanyahu, Orbán, Kaczyński, Salvini, Le Pen, Erdogan, Al-Sisi, Duterte, Vox en España, entre otros-, supone una amenaza para la libertad y la democracia y un riesgo para la convivencia. Son la expresión actualizada de las falanges fascistas y los escuadrones nazis que provocaron la mayor masacre de la historia de la humanidad y el régimen político más criminal que haya existido.

El PCE muestra su satisfacción por la definitiva salida de la Administración Trump, aunque mantiene sus dudas sobre la capacidad de que la Presidencia de Biden vaya a significar cambios profundos en la política exterior e interior de los EE. UU. El retorno a la Organización Mundial de la Salud y al Acuerdo de París es una buena noticia, como el anuncio de revertir el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Pero Biden ya ha manifestado que mantendrá la embajada estadounidense en Jerusalén, gesto de enorme significación que constituye de hecho una nueva agresión al pueblo palestino, y Biden ya ha tomado las primeras decisiones inquietantes: Avril Haines, elegida para asumir la dirección de la Inteligencia Nacional, fue subdirectora de la CIA entre 2013 y 2015, y desde esa responsabilidad autorizó el uso de drones para ejecutar asesinatos extrajudiciales por el mundo. También, Biden va a elegir, como director de la CIA, a William J. Burns, un halcón que participó en el diseño de la operación para destruir Yugoslavia, y controló desde el Departamento de Estado las agresiones y guerras norteamericanas en Afganistán e Iraq, con el gobierno de George W. Bush.

Mostramos nuestra solidaridad con las fuerzas políticas y sociales de los EE. UU. que se definen como socialistas, defendiendo políticas socialmente avanzadas y combatiendo sobre el terreno a las organizaciones racistas, violentas, de la extrema derecha estadounidense.

Simultáneamente, continuaremos trabajando para avanzar en procesos de convergencia internacional entre las fuerzas políticas y sociales de izquierdas para sumar fuerzas en la defensa de un nuevo orden internacional de carácter multipolar que ponga punto final a bloqueos ilegales que los EE. UU. mantienen contra los Estados que no se han sometido a sus intereses y que dispute la

hegemonía a la internacional neofascista que Trump y sus aliados han dejado organizada.

No son previsibles grandes cambios en la política exterior norteamericana durante la administración Biden, sin perjuicio de giros tácticos en distintos conflictos actualmente abiertos en los que la acción exterior de Trump ha sido incapaz de alcanzar victorias políticas.

Continuará la obsesiva búsqueda de la "contención de China", el acoso a Rusia en el Este europeo, el Mar Negro y el Cáucaso, con la posible instalación de armamento nuclear en Polonia; y la inercia de las guerras iniciadas en Oriente Medio y en Libia, que siguen sin resolverse, además del persistente acoso a Cuba y Venezuela. Biden tiene también que afrontar el déficit comercial y fiscal, que van a seguir creciendo y que no va a poder resolver, por lo que no va a terminar con la guerra comercial iniciada en 2017 con China. Por su parte, Rusia no espera cambios relevantes con Biden: Lavrov ha calificado las actuales relaciones entre los dos países como las peores desde el fin de la *guerra fría* y no es previsible una mejora, visto que todos los conflictos políticos en los países europeos que no pertenecen a la UE responden a la política de la OTAN de acercar sus tropas hasta la frontera rusa.

La victoria de Maia Sandu en Moldavia, que fuerza la salida de Dodón de la presidencia, en unas elecciones celebradas bajo el boicot del influyente Partido Comunista, abre inquietantes hipótesis de futuro porque Sandu es proclive a reforzar lazos con Rumania, y la hipótesis de una unión entre los dos países puede encender de nuevo la guerra con las regiones de Transnistria y Gagauzia.

Se reactivan los conflictos en el Cáucaso. Parálisis del gobierno en Armenia: la población ha recibido la derrota militar ante Azerbaijón como una catástrofe nacional, e identifica al primer ministro Pashinián (partidario de la OTAN y proclive a Estados Unidos) con el papel de Yeltsin en la década de los noventa en la URSS; su debilidad esconde una paradoja: casi nadie lo apoya, pero nadie quiere sustituirlo porque tendría que llevar a cabo la ejecución del acuerdo con Bakú y Moscú que implica la entrega de los territorios azeríes que Armenia retenía desde 1994, y que, sin embargo, no puede negarse a devolver. Moscú, el único aliado posible de Armenia, vuelve a desempeñar un papel preponderante, aunque quiere mantener también los lazos con Azerbaijón.

La UE se muestra parte activa de la actuación de presión de la OTAN a Rusia: Alemania, que ha presidido la Unión durante el segundo semestre de 2020, acusa a Moscú por su actuación sobre Crimea, Abjasia, Osetia del Sur, Moldavia (Transnistria), Ucrania, e incluso desliza sospechas, por boca de Heiko Maas (ministro del SPD en el gobierno Merkel) sobre el acuerdo en Nagorno-Karabaj auspiciado por Rusia entre Armenia y Azerbaijón. Maas mantiene que Biden "apuesta por la fuerza" en las relaciones con Moscú. Pese a ello, se ha culminado el tramo alemán del *Nord Stream 2* y solo falta el tramo danés para completarlo, que modificará el mapa europeo de la energía y limitará la llegada de gas natural licuado de Estados Unidos.

En el continente asiático, la situación continúa agravándose en Yemen, con millones de personas en una situación de hambruna desesperada. Arabia Saudí

ha impuesto a sus aliados (el gobierno de Mansur al-Hadi y los secesionistas del Consejo Transitorio Sureño, CTS, a quienes apoyan los Emiratos Árabes Unidos, bandos que se enfrentaron militarmente en los meses anteriores) un acuerdo para formar un nuevo gobierno de unidad en Adén, mientras los hutíes continúan controlando la capital, Saná, y la guerra y la agresión saudita no se detienen.

La reactivación del terrorismo de Daesh en Siria muestra la realidad de la inconclusa guerra, y las dificultades del gobierno de Damasco para controlar todo el territorio, que junto a las nuevas sanciones norteamericanas (la Ley César) agravan la crisis económica en el país, algo que ha llevado a la ONU a pedir a Estados Unidos su levantamiento. En la India continúan las protestas de millones de personas contra las leyes agrícolas del gobierno de Modi, donde el Partido Comunista, en sus dos ramas, ha tenido una destacada actividad en la organización de las movilizaciones y en la huelga general, seguida por doscientos cincuenta millones de trabajadores.

En Nepal, el primer ministro Oli consiguió el acuerdo de la presidenta del país (ambos, miembros del Partido Comunista nepalí) para disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones. Existen fuertes divergencias en el seno del Partido Comunista entre Oli y Prachanda. China está trabajando en proyectos de desarrollo e infraestructuras, y en la trastienda, India trata de intervenir para mantener a Nepal en su área de influencia. Oli ha acusado a Delhi de intervencionismo en su país.

En Kirguizistán, el nacionalista Sadyr Japárov, tras salir de la cárcel, ganó las elecciones presidenciales en enero, con más del 80 % de los votos. Tras él, Adajan Madumárov, con menos del 7 %. Japárov sustituirá a Sooronbai Jeenbekov, que dimitió tras los disturbios de octubre de 2020. Además, se votaron enmiendas constitucionales, para modificar el régimen político del país, que sigue dependiendo de su alianza con Moscú: de 6'5 de habitantes del país, dos millones de kirguises trabajan en Rusia.

El terrorismo de Estado israelí ha culminado por el momento con el asesinato de uno de los más relevantes miembros del programa nuclear iraní, Mohsen Fajrizadeh, el quinto científico asesinado. La indudable autoría israelí perseguía tres objetivos: frenar el desarrollo del programa nuclear iraní, forzar con esa grave provocación a una respuesta militar a Teherán que, aunque fuera limitada podría abrir un escenario de guerra en la región si ataca a Israel, y dificultar el acercamiento de Estados Unidos. Biden afirmó durante la campaña electoral que regresaría al acuerdo 5+1, aunque al mismo tiempo persigue detener el programa de misiles iraní que no está incluido en el 5+1, y el asesinato de Fajrizadeh va a complicar mucho las negociaciones.

El hundimiento del Líbano es un hecho; el presidente Aoun encargó en octubre a Saad Hariri la formación de nuevo gobierno, que no ha podido concretarse. Aoun ha pedido ayuda a la Liga Árabe, pero la situación en el país es catastrófica. En la vecina Turquía, se asiste al fortalecimiento del poder civil de Erdogan tras las duras condenas impuestas a los militares del fallido golpe de Estado de agosto de 2016, con un evidente desplazamiento a un régimen

cesarista y dictatorial, que interviene con tropas y mercenarios en las guerras de Oriente Medio y el Magreb, Siria, Iraq, Libia, mientras se distancia de Estados Unidos, enarbolando una retórica otomana que persigue un nuevo y activo protagonismo en Oriente Medio, norte de África y cuerno de África.

Además de las presiones estadounidenses sobre la Junta Militar de Sudán, que han llevado a Jartum a establecer relaciones con Tel-Aviv, el encuentro entre Pompeo, Mohamed bin Salmán y Netanyahu revela la pretensión del gobierno norteamericano de incrementar el reconocimiento de Israel en el mundo islámico, política que augura nuevos problemas para el pueblo palestino, a la espera de hipotéticas decisiones de Biden. También Marruecos ha seguido sus pasos, reconociendo a Israel con la moneda de cambio del apoyo de la administración Trump a la anexión del Sáhara Occidental. La ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos con la consiguiente reanudación del enfrentamiento militar con el Frente Polisario, todo agravado en el caso de que finalmente se consolide el reconocimiento por Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, aumentan las dificultades que enfrentan tanto la RASD como el pueblo palestino.

Un asunto de enorme relevancia ha sido la firma del RCEP, el acuerdo comercial más grande del mundo, donde se integran China, la ASEAN, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, que suponen un 30 % de la economía mundial, con una población combinada de 2.200 millones de personas. Es la primera vez que Pekín y Tokio, dos de las tres primeras potencias económicas mundiales, suscriben un acuerdo de reducción arancelaria y de libre comercio. Falta por integrarse la India, que, aunque tiene la puerta abierta recela del potencial chino y se aproxima a Estados Unidos. El RCEP es una gran victoria para China, que mantuvo también la mano tendida de Xi Jinping en la cumbre de la APEC. Además, Pekín ha suscrito el Tratado de Inversiones con la Unión Europea, y trabaja en el desarrollo de un nuevo acuerdo trilateral con Seúl y Tokio.

Mejoran, cautelosamente, las relaciones entre Pekín y Tokio, tras la reunión de Wang Yi y el primer ministro Suga, que han decidido abrir una ronda de conversaciones para aumentar los intercambios y para asegurar la estabilidad regional: el acuerdo es relevante porque se da en el contexto del acoso norteamericano y las iniciativas militares del grupo QUAD. Suga parece orientarse hacia un equilibrio en las relaciones con Estados Unidos y China: está ligado a Washington por sus acuerdos militares, pero necesita a China para los intercambios y el desarrollo económico.

La respuesta norteamericana no se ha hecho esperar: el documento del Departamento de Estado (*The Elements of the China Challenge*) acusa a Pekín de hegemonismo, y recomienda fortalecer el ejército de Estados Unidos para que siga siendo el más poderoso del planeta, lo que implica una firme apuesta por la militarización. Además, el Pentágono mostró su agresividad con los ejercicios militares *Malabar* en el Mar Árabe, realizados por tropas de Estados Unidos, India, Japón y Australia, QUAD, con portaaviones y buques de guerra, incluido el *Nimitz*, que es el buque de guerra más grande del mundo, y la actividad norteamericana en Asia no es ajena a los ecos del enfrentamiento chino-indio en Ladakh y su propósito de “frenar el expansionismo chino en la región del Indo Pacífico”. También es relevante la tensión China-Australia,

donde Canberra, siguiendo el guion de Washington, exige responsabilidades a Pekín por la Covid-19, y pretende vetar el 5G chino, junto a los nuevos acuerdos militares que refuerzan la apuesta norteamericana por el QUAD y la contención de China.

América recupera lentamente la bandera de los movimientos progresistas. En Venezuela, las elecciones parlamentarias han otorgado una aplastante victoria al PSUV y sus aliados. Cuba está soportando una nueva operación de acoso, auspiciada por Estados Unidos, con el llamado Movimiento San Isidro. También condenamos la decisión de la Administración Trump de incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, adoptada por el Gobierno de Donald Trump, a nueve días de abandonar la Casa Blanca. Esta decisión, anunciada por el actual Secretario de Estado, Mike Pompeo, revierte la tomada por Obama en el año 2015 quien retiró a Cuba de esa lista donde figuraba desde el año 1982. El anuncio de Pompeo que ocurre pocos días después del asalto al Capitolio alentado por Trump es una decisión totalmente arbitraria y unilateral que vulnera la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Exigimos una condena unánime de la comunidad internacional ante una decisión que no respeta los derechos fundamentales del pueblo cubano y que intenta ahondar en la herida del bloqueo económico mantenido por EE. UU.

Se agrava la crisis en Perú, donde las protestas por la Ley Agraria han sido reprimidas duramente por la policía, que ha matado a varios manifestantes. En Colombia continúa el acoso del gobierno uribista al acuerdo de paz y los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros. Ya son 252 los antiguos integrantes de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo de paz.

A reseñar, la victoria del movimiento a favor del derecho al aborto en Argentina. En Argentina, el pasado 30 de diciembre se ratificó en el senado la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, un derecho humano de las mujeres que por el hecho de ejercerlo se criminaliza aún hoy a millones de mujeres en el mundo.

La ley argentina no es solo una victoria para las mujeres y el movimiento feminista que durante décadas han estado luchando y movilizándose sino también para las clases populares porque es reconocer que, en el contexto de Latinoamérica, sumido en la pobreza y la desigualdad social, son las mujeres pobres quienes sufren o mueren por abortos realizados en clandestinidad.

La legalización del aborto voluntario en Argentina sigue empoderando las mujeres de la región de Latinoamérica y Caribe en la lucha por sus derechos. Al igual que fue Cuba en 1965 con la legalización del aborto y en 2012 por el gobierno del Frente Amplio en el Uruguay.

África asiste a la guerra en el Tigré etíope, y al avance de los rebeldes en República Centroafricana, contrarios al presidente Touadéra, que se acercan a Bangui. Rusia ha enviado ayuda militar y trescientos instructores para asistir al gobierno. China es el país que más está ayudando a África en la lucha contra la pandemia, hecho que ha reconocido la Unión Europea. En Uganda, de nuevo el anticomunista Yoweri Museveni, partidario del liberalismo económico, ha ganado las elecciones de enero marcadas por el fraude y la represión,

enfrentado al candidato opositor de centroizquierda, Bobi Wine. La represión ha causado decenas de muertos en el país en los últimos meses. La crisis en Sudán se agrava con nuevos enfrentamientos en Darfur occidental, donde milicias armadas asesinaron a un centenar de personas. Es relevante que la República Democrática del Congo y Botswana se hayan unido a la *nueva ruta de la seda* de China. Con ellos, solo en África, ya son 46 países los que se han incorporado a la iniciativa china.

Aunque no podemos esperar nada de Biden, la salida de Trump de la presidencia norteamericana es una magnífica noticia porque esa internacional de extrema derecha que se había configurado con él pierde a su principal referente y actor más poderoso. Sin embargo, el peligro del neofascismo y de la extrema derecha en el mundo continúa muy presente: la propuesta rusa de una resolución condenando la glorificación del nazismo fue aprobada por la Asamblea General de la ONU por una gran mayoría. Solo dos países votaron en contra: Estados Unidos y Ucrania. Pero resultado vergonzosa y aun no explicada debidamente la abstención de los países de la Unión Europea.

En este contexto, nuestro Partido continuará trabajando para el fortalecimiento del bloque de fuerzas políticas y países contrarios al imperialismo y favorables al pleno respeto y reconocimiento de la soberanía de los pueblos sin injerencias extranjeras y la resolución pacífica de conflictos, todo ello siendo conscientes de que la paz es el derecho síntesis sin cuya existencia es imposible para los pueblos del mundo y en especial para la clase trabajadora disfrutar de todos los derechos humanos y por tanto de una vida digna.

**II.-** La crisis provocada por la Pandemia causada por el COVID19 ha puesto de manifiesto todas las debilidades y contradicciones de una Unión Europea construida al servicio de un Capital que se planteaba la integración regional como la mejor manera de alcanzar un mercado único en el que las multinacionales impusieran sus condiciones por encima de cualquier otro tipo de soberanía, mediante Tratados de Libre Comercio abusivos.

La Unión Europea afronta un complicado futuro: la reducción de su peso económico y político con la culminación del Brexit, y la hipótesis de futuros abandonos de otros países, junto a la difícil corresponsabilidad de los gobiernos nacionales, el escandaloso déficit democrático, y la paralización de cualquier iniciativa orientada a un horizonte federal o confederal, sin que, además, a la moneda única se añada una fiscalidad unitaria, una unión bancaria y un proyecto real de avance hacia la unión política. El agravamiento de la crisis económica causada por la pandemia precisará la movilización de ingentes recursos económicos, y aunque la retirada del veto húngaro y polaco a los recursos para combatir la pandemia sea una buena noticia, el actual fondo de reconstrucción aprobado probablemente no va a ser suficiente para superar la destrucción de estructura productiva y evitar el riesgo de desmantelamiento de servicios públicos al que se va a enfrentar la Unión Europea. El rechazo de los países mediterráneos (con la excepción de Francia) al Pacto migratorio propuesto por la Comisión Europea, también ahonda en la situación de crisis de la Unión Europea.

En este contexto, la firma del Acuerdo de Inversiones de la Unión Europea con China, que se negociaba desde 2014, es una buena noticia, que contribuye al multilateralismo y la distensión. No se puede obviar que Xi Jinping llamó a una mayor colaboración en el esfuerzo por la conservación ecológica.

En los próximos meses la batalla política a la que nos enfrentaremos será definir los criterios con los que España utilizará los fondos para la reconstrucción recibidos desde la Unión Europea. Bajo la conceptualización de transición ecológica y digitalización de la economía se abren diversas posibilidades que ocasionarán una dura pugna entre el gran capital, por una parte, los distintos lobbies empresariales, y las administraciones públicas. En esta pugna las fuerzas políticas de izquierda y en especial nuestro Partido tendremos que intervenir para conseguir que esos fondos permitan por una parte reforzar los servicios públicos y por otra parte posibiliten una reindustrialización de nuestro país en las líneas estratégicas que se abren para la aplicación de estos fondos, cómo son la puesta en marcha de iniciativas industriales de producción de bienes de equipos relacionados con la producción energética no contaminante, la investigación, desarrollo y la innovación tecnológica, y el desarrollo de la industria electrónica, informática y biotecnológica; acompañadas de medidas disruptivas que contemplen otros factores como la ecología, la digitalización y la igualdad. Esta reconstrucción industrial debe de servir de palanca para el desarrollo, la transformación del modelo, el impulso al medio rural, la creación de empleo de calidad y la fijación de población. Potenciar la industria agroalimentaria, como herramienta para la diversificación económica y mantener el valor añadido que genera la transformación y distribución. Nuestro partido debe impulsar un amplio debate tanto en Izquierda Unida como en el espacio de Unidas Podemos que permita poner en marcha con rapidez los equipos de expertos necesarios para definir las propuestas que necesariamente deberán llevarse al Consejo de Ministros, propuestas que debemos elaborar en coordinación con los sindicatos y sectores empresariales confrontados con los grandes oligopolios y multinacionales y que puedan convertirse en nuestros aliados en la consecución de estos mismos objetivos. Nuestro objetivo estratégico ante este reto será intentar poner en marcha un sector industrial público y con alto contenido de implicación y participación de la economía social. Sin duda estamos ante una oportunidad para recuperar el tiempo perdido por España para la puesta en marcha de un sector industrial modernizado y abandonar definitivamente nuestro papel de país europeo dedicado preferentemente a los sectores primarios, servicios turísticos y bancarios que nos había sido adjudicado desde que ingresamos en la Unión Europea.

Pero también necesitamos para que el anterior debate que vamos a intentar poner en marcha en España tenga éxito, que se acompañe de un trabajo político correlativo en Europa. Las fuerzas ecologistas, progresistas y de izquierdas en Europa deben estar lo suficientemente organizadas como para poder aprovechar este momento y optar por construir una alternativa para una nueva integración de los pueblos de Europa, horizontal, solidaria, democrática, socialmente avanzada, basada en la soberanía de los pueblos europeos, que pueda disputar la hegemonía social y política a las derechas ofreciendo a la mayoría social trabajadora y a la clase obrera una propuesta de sociedad creíble, fácilmente entendible basada en la solidaridad, la cooperación, la

defensa de los derechos humanos para todo el Pueblo, ponga la economía al servicio de la resolución de los problemas de la gente.

Por ello, el PCE también tiene el reto de trabajar para acabar con la desunión, la descoordinación, y la división que se producen actualmente entre las fuerzas que se oponen a las políticas neoliberales que pretenden seguir imponiéndose desde la UE. De lo contrario, continuará nuestra paulatina pérdida de influencia en el propio seno de las clases populares y se hará imposible alcanzar, en España y en Europa, los objetivos que nos hemos marcado.

El PCE cree que Unidas Podemos está en condiciones de jugar como tal un papel en los distintos espacios unitarios que hoy existen en Europa y liderar la confrontación con las políticas neoliberales que se realizan en la UE.

### **III.- La continua desestabilización de la ultraderecha**

Reiteramos lo indicado en nuestro Informe a la Comisión Política del día 15 de enero respecto a la continua actividad desestabilizadora de la extrema derecha y los sectores oligárquicos que se sirven de la anterior

Desde julio de 2018 hasta hoy viene proliferando y multiplicándose las cartas y manifiestos firmadas por militares en situación de retiro descalificando al actual sistema democrático, pidiendo medidas de intervención para corregir lo que consideran una "situación política inaceptable", eufemismo para denominar al gobierno de coalición en el que participa Unidas Podemos. También se han difundido demasiadas manifestaciones de adhesión al franquismo habidas en unidades militares.

El Partido Comunista de España ha venido denunciando la existencia de una operación de desestabilización de la democracia, en primer lugar, para impedir la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, y ahora para atacar al gobierno de coalición. No cabe duda de que existe un plan organizado desde la derecha política, económica y judicial más extrema, con la participación de sectores no solo militares, sino institucionales, económicos y sociales, cuyo objetivo es acabar con este Gobierno por cualquier medio, sirviéndose especialmente de la intoxicación mediática, el acoso judicial y la utilización antidemocrática de distintas instituciones del Estado.

Sin duda la infiltración de la ultraderecha, como movimiento organizado, en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado constituye una grave amenaza, aunque a fecha de hoy no puede afirmarse que sean mayoritarios estos sectores antidemocráticos, pero trabajan activamente para serlo.

La estrategia desestabilizadora pretende arrastrar a otras esferas de poder, mediáticas, económicas, institucionales y judiciales y convertir a todos los anteriores en actores de desestabilización. Todo con la activa participación de redes y estructuras vinculadas a la ultraderecha.

### **IV. La situación de la Pandemia**

Ya fuera a consecuencia de las navidades y las celebraciones de estas fechas, por la dejación por parte de las CCAA de la adopción de todas las medidas de contención previstas en el Decreto ley de Estado de Alarma en vigor, o por el incumplimiento de las medidas adoptadas por las distintas administraciones -o por todos los anteriores motivos- lo cierto es que desde que la administración central transfirió a las comunidades autónomas la decisión sobre las medidas a adoptar en cada territorio para hacer frente a la pandemia nos hemos encontrado bien con un incremento de los contagios de la segunda ola o bien ante la llegada de una tercera ola. En todo caso, estamos ante una subida sumamente preocupante de la incidencia del COVID-19 y su consecuente afectación a la situación económica con la agudización de la crisis social y laboral.

El Partido Comunista de España hace un llamamiento a la responsabilidad tanto a las autoridades en sus distintos niveles de competencia, como del conjunto de las personas para conseguir entre todas la disminución y doblamiento de la actual ola de contagios.

En un entorno europeo en el que los fallecidos de la segunda ola han superado a los de la primera, se evidencia que no se ha producido una adecuada combinación de medidas y que debemos de reclamar seguir poniendo la vida de las personas por delante de intereses económicos cortoplacistas, y buscar elementos de coordinación internacional y dentro de los países para luchar con las medidas que han demostrado ser más efectivas y eficientes.

La llegada de vacunas no puede hacernos perder la perspectiva de que no todo el mundo podrá vacunarse en la primera fase de vacunación. La vacunación en nuestro país se va a sustentar sobre la red de Atención Primaria, por ello este estamento asistencial deberá reforzarse con fondos finalistas de forma innegociable, no sólo para asegurar el éxito de la futura campaña de vacunación, sino para seguir siendo la línea de atención y puerta más cercana de atención a los pacientes no COVID, cuya morbimortalidad se ha visto afectada por el efecto de la saturación del sistema debida a la COVID. La marcha de las campañas de vacunación en estos momentos se encuentra muy lejos de los objetivos trazados con una muy baja incidencia todavía sin duda alguna debido al debilitamiento de los sistemas de atención primaria en toda España. Aun así, hay evidentes diferencias entre la puesta en marcha de las campañas de vacunación por unas y otras comunidades autónomas. Asturias se encuentra la cabeza del número de dosis utilizadas por habitantes, mientras que la Comunidad de Madrid se encuentra en el último puesto en toda España. Además, e insistiendo en que la vacuna no podrá llegar a toda la población en la primera fase de vacunación, la inmunización comunitaria llegará hasta una cobertura eficiente entre el 60 y 80%. Por lo tanto, habrá que combinar la distribución de las vacunas con otras medidas de distanciamiento físico, prevención personal, (uso de mascarillas) y de higiene adecuada, (lavado frecuente de manos, ventilación en entornos cerrados). Para asegurar dichas coberturas, las campañas de vacunación responsabilidad de las Comunidades Autónomas deberán incrementarse además de complementarse con adecuadas campañas de información y educación sanitaria que enfrente el miedo e inseguridad promovido desde grupúsculos antivacunas, negacionistas etc.

Especial gravedad está teniendo la constatación de la falta de medios adecuados para la optimización de las dosis de vacunas -a pesar de haber sido advertida la necesidad de esos medios específicos por parte del gobierno central hace meses- o el problema de la falta de protocolos rigurosos para la aplicación de las vacunas o en todo caso la falta de mecanismos de control para el cumplimiento estricto de dichos protocolos. Demasiados casos de incumplimiento de los protocolos - en principio en las administraciones locales, posteriormente en las autonómicas y recientemente también en la administración central del Estado- con la aparición de responsables políticos o administrativos que se vacunan por delante de lo establecido en los protocolos en detrimento de la correcta y rápida vacunación de colectivos que o bien son esenciales por encontrarse en primera línea del combate de la pandemia, o bien son vulnerables, pone de manifiesto no solamente una evidente falta de ética de quienes así actúan -ningún responsable político o afiliado a Unidas Podemos se encuentra en esa situación- sino también la falta de medidas de organización, control y verificación por parte de las administraciones públicas responsables del proceso de vacunación. Exigimos la elaboración de protocolos estrictos de vacunación, así como su cumplimiento y verificación, para garantizar que en primer lugar se vacunan los colectivos sumamente vulnerables, los profesionales de la salud, quienes realizan personalmente servicios esenciales que les obligan a soportar el riesgo de contagio y todas las personas que combaten la pandemia directamente en la primera línea.

Queremos hacer mención expresa al impacto de la COVID19 en las mujeres. Algunas de las profesiones que han estado más expuestas al contagio están mayoritariamente ocupadas por mujeres: enfermería, cuidados de ancianos, limpieza o cajeras en supermercados. Además, la población femenina se muestra como el grupo más vulnerable a la ansiedad, la depresión y el estrés durante el confinamiento por la mayor carga que supone combinar el trabajo o teletrabajo con el cuidado de hijos y otros roles de género.

Dejar que se siga invirtiendo en construcciones sanitarias, mientras a pocos kilómetros se tiene un hospital vacío o torres hospitalarias no utilizadas es una irresponsabilidad que cuesta vidas. Los fondos han de ir dirigidos a salvar a las personas por delante de cualquier otro criterio, si no estaremos dejando que los criterios del capitalismo de poner por delante ganancias y macroeconomía por delante de las personas logren objetivos especulativos, especulen y se lucren con el sufrimiento de la mayoría.

En cambio, la realización de cribados masivos a trabajadores de primera línea y actividades esenciales como los sectores de trabajo sanitario y sociosanitario, comercio, alimentación y personas de mayor riesgo como empleados de transportes públicos e integrantes de cuerpo de seguridad, asegurarán una adecuada lucha contra el virus y un uso eficiente de los recursos de todos en interés de todos.

Por lo tanto, el PCE debe trabajar para garantizar allí donde podamos la priorización de atención sanitaria, y el uso de recursos como las vacunas basados en criterios científicos y clínicos: Nivel de morbilidad grave y mortalidad, grupos de población de mayor riesgo, grado de exposición a la enfermedad,

impacto social y equidad de la atención, foco en la vigilancia, seguimiento y tratamientos orientado a disminuir la transmisibilidad de la enfermedad.

Para atajar la pandemia y prevenir sucesivas olas de contagio, defendemos el desarrollo y mantenimiento de criterios homogéneos a la hora de adoptar medidas, basados en la evidencia científica al margen de otros tipos de condicionamientos. Defendemos la adopción de medidas contundentes, tanto por parte de las CCAA como por parte del Gobierno central, para aumentar la limitación de actividades sociales o laborales de forma adecuada para evitar la propagación de la epidemia, medidas de endurecimiento de los periodos diarios de confinamiento y limitación de la actividad económica no esencial, en especial las actividades que incrementan el riesgo de contagios, y para ello insistimos en la necesidad de que antes de que se acuerde una medida de confinamiento domiciliario generalizado, todas las administraciones autonómicas pongan en marcha la totalidad de las medidas de las que pueden hacer uso. En caso de finalmente acordarse un confinamiento estricto, el PCE volverá a poner en marcha, como hicimos en el primer confinamiento, los mecanismos de recogida de propuestas desde los movimientos sociales y territorios para su implementación en esas circunstancias, así como el seguimiento de la implementación de las medidas que se acuerden para su constante mejora y para garantizar la coordinación de la actuación política de Unidas Podemos.

Creemos necesario que las distintas organizaciones del PCE -directamente y a través de Izquierda Unida y Unidas Podemos- ejerzan el control necesario sobre los fondos transferidos por el gobierno central a las administraciones autonómicas y locales para combatir la pandemia y mantener el escudo social, tanto para garantizar que dichos fondos se utilizan de formas adecuada como para detectar las deficiencias en inversiones públicas o sociales necesarias para garantizar los derechos y la atención a la clase trabajadora en todos los territorios del Estado durante la pandemia.

Trabajaremos también para que las medidas aprobadas y que forman parte del denominado escudo social, se expliquen y difundan adecuadamente entre todo nuestro pueblo, para evitar la permanente descalificación a la acción de este gobierno -y en especial de los ministerios dirigidos por compañeras y compañeros de UP- que se difunde desde los medios de comunicación controlados por la derecha.

## **V.- La reforma laboral, subida del SMI y la defensa del sistema de pensiones**

Sin duda, la crisis económica y social provocada por la pandemia está empeorando las condiciones de vida de nuestro pueblo, a pesar del despliegue del escudo social. La pérdida de derechos laborales de los últimos años, los recortes y las privatizaciones, medidas propias de las políticas neoliberales, han evidenciado llegada la pandemia, que el sistema capitalista es incapaz de proteger a la clase trabajadora y a nuestro pueblo. El desempleo ha crecido hasta casi los 4 millones de personas y prácticamente un millón de puestos de trabajos son en estos momentos mantenidos gracias a los ERTES puestos en marcha por el Ministerio de Trabajo. En este contexto es imprescindible acelerar

la reforma laboral, para dejar sin efecto cuantas medidas de desregulación laboral sea posible, para acabar con la precariedad laboral y mejorar las condiciones de trabajo.

Pero la puesta en marcha de las medidas previstas en el acuerdo de Gobierno de coalición para dejar sin efecto la reforma laboral aprobada por los anteriores gobiernos o para conseguir la subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio en nuestro país, están encontrando como era previsible grandes resistencias por parte de los sectores empresariales y la derecha política.

En este momento tanto la derecha, como sectores del Partido Socialista como la CEOE se oponen radicalmente a la subida del SMI en el 2021. Es evidente la intervención del área económica del Gobierno en defensa de los intereses de los grandes grupos empresariales y confrontando con las propuestas de Unidas Podemos, en especial con las relacionadas con el mundo del trabajo, excediéndose mucho en las competencias de dicha área económica encabezado por la vicepresidenta Nadia Calviño. En estos momentos, el SMI está técnicamente "congelado", lo que significa que hay vía abierta para continuar luchando por una subida en este año.

Respecto a las medidas de desmantelamiento de las reformas laborales la batalla ya ha comenzado con el debate en torno a la regulación de las denominadas plataformas de raiders, es decir la introducción de una regulación laboral expresa respecto a los repartidores. Como es conocido, en los últimos meses la Inspección de Trabajo viene impulsando procedimientos sancionadores que conjugados con distintas sentencias emitidas por tribunales laborales, han ido abriendo el escenario de una regulación del sector con pleno reconocimiento de derechos laborales, ámbito en el que ha sido más fácil avanzar debido a los propios intereses de algunos grupos empresariales dedicados al transporte que veían en las empresas de raiders una evidente competencia desleal.

Sin embargo, las medidas para la recuperación de la negociación colectiva y la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa, así como la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos, están demorando en ser adoptadas debido a la coordinación entre la CEOE y determinados sectores del Gobierno que se refieren en el área económica. Junto a ello es necesario avanzar en la regulación de la subcontratación laboral, art 42 ET, y la simplificación de los modelos de contratación conforme a la propuesta del Ministerio de Trabajo de reducirlos a tres: un contrato de trabajo indefinido, otro contrato de formación o prácticas y otro contrato temporal, de carácter excepcional y con una regulación expresa de la causalidad que resulte absolutamente objetiva y clara, que haga de la contratación temporal la excepción y no la regla en España. Debemos destacar que la actitud de los sindicatos ha sido de coordinación absoluta con el Ministerio de Trabajo y por lo tanto con las posiciones políticas del espacio de Unidas Podemos. Sin embargo, el bloqueo está siendo evidente con la excusa de la agudización de la pandemia y la situación económica de las empresas obviando que la política de ERTES puesta en marcha por el Ministerio de Trabajo ha permitido el mantenimiento de prácticamente 800.000 puestos de trabajo que de otra forma se habrían perdido en nuestro país desde el inicio de la pandemia. Elio

perdemos de vista que las altas tasas de temporalidad En España han sido la principal causa de que el desempleo se haya disparado desde el inicio de la pandemia hasta encontrarnos con cifras cercanas a los cuatro millones de desempleados a pesar del esfuerzo hecho con la puesta en marcha de los ERTES.

La situación de bloqueo para alcanzar un acuerdo en la mesa de diálogo social respecto a la puesta en marcha de la reforma laboral se está utilizando como excusa para demorar la agenda legislativa que debe poner en marcha el Consejo de Ministros y el Parlamento para llevar a cabo la reforma acordada en el acuerdo del gobierno de coalición.

Los sindicatos de clase han convocado las primeras movilizaciones de forma descentralizada en toda España para el 11 de febrero. El Partido Comunista de España debe contribuir a organizar las movilizaciones sindicales y en general de las personas trabajadoras, junto con todos los sectores organizados de la sociedad que seamos capaces de sumar a estas movilizaciones. Nuestra tarea debe ser que tanto Izquierda Unida como el espacio de Unidas Podemos trabajen, junto a los sindicatos para que nuestro pueblo y en especial la clase trabajadora, reivindique en las calles la puesta en marcha de una reforma laboral y la continuidad en la subida del SMI. Es conveniente que estos objetivos se alcancen mediante un gran acuerdo social entre el Gobierno los sindicatos y las organizaciones empresariales, pero lo cierto es que la mesa de dialogo no está avanzando por la resistencia de las organizaciones empresariales, por lo que deben ponerse en marcha los mecanismos legislativo para hacer realidad los acuerdos programáticos del Gobierno de coalición y aprobar lo más pronto posible las medidas antes indicadas.

Para ello es imprescindible que desde todo el espacio de Unidas Podemos, en especial desde Izquierda Unida, y en todo el territorio del Estado, se coordine con las organizaciones sindicales para garantizar el éxito de las movilizaciones del 11 de febrero y posteriores, en el complejo contexto de la agudización de la pandemia, lo que hace muy difícil la organización de movilizaciones masivas.

En la actual situación de correlación de fuerzas políticas, únicamente la organización de amplias movilizaciones sindicales puede permitir que se resuelva a nuestro favor la pugna a para aprobar las medidas que dejen sin efecto las reformas laborales de los gobiernos neoliberales y continúen el incremento del SMI.

El PCE trabajará para garantizar la realización de las movilizaciones, con los siguientes criterios de trabajo

1º.- Establecer coordinación con los distintos sindicatos de clase existentes en cada territorio o sector para contribuir a organizar las movilizaciones del 11 de febrero, poniendo nuestro trabajo político y recursos a disposición.

2º.- Desplegar nuestra incidencia en los movimientos sociales para poner en marcha una agenda coincidente con las movilizaciones sindicales reclamando los mismos objetivos.

3º.- Iniciativas de nuestros cargos públicos en ámbitos locales y autonómicos para impulsar y acompañar la movilización.

4º.- Puesta en marcha de una campaña propia en el PCE e IU y si fuera posible en el espacio de Unidas Podemos, para dar a conocer las movilizaciones y las reivindicaciones que las motivan.

5º.- En el marco de la realización de las anteriores tareas, dar un nuevo impulso a la actividad de sectorialización de las estructuras del PCE, conforme a los acuerdos del XX Congreso.

6º.- Vincular a la realización de las anteriores tareas al espacio de Unidas Podemos, de forma que la preparación de estas movilizaciones ayude a impulsar el trabajo unitario y a reforzar la organización del espacio UP.

7º.- Las dificultades derivadas del incremento de los contagios a consecuencia de la pandemia y el endurecimiento de las medidas de relacionamiento social para hacer bajar la curva epidémica, nos obligan a poner en marcha nuevas formas de movilización social y difusión de los objetivos de esta, que permitan una amplia participación no necesaria ni únicamente mediante las actividades realizadas en las calles.

En las últimas semanas hemos asistido a una nueva pugna en el seno del Consejo de Ministros debido a los anuncios unilaterales del ministro Escrivá de poner en marcha una reforma del sistema de pensiones que incremente los años de cotización para poder acceder a la pensión máxima de jubilación, así como la imposición de amplios periodos de vida laboral para el cálculo de la cuantía de las pensiones de jubilación. Medidas todas ellas que además de ser claramente perjudiciales para la clase trabajadora de nuestro país no se encuentran contempladas entre las 22 recomendaciones alcanzadas por el Pacto de Toledo en el Congreso en el mes de noviembre. De hecho entre esas 22 recomendaciones, y aunque algunas de éstas eran cuestionables, lo más destacable era que se habían eliminado los denominados factores de sostenibilidad que propiciaban la ampliación del periodo laboral activo para poder acceder a las pensiones máximas, así como se limitaban los años de cómputo de las cotizaciones para que no pudiera calcularse la cuantía definitiva de la pensión de jubilación sobre los años con cotizaciones más bajas del trabajador o la trabajadora.

En este contexto confrontar con los hasta ahora "globos sonda de opinión" lanzados por el ministro Escrivá es también un objetivo de trabajo de nuestro Partido y de Izquierda Unida en coordinación con el espacio de Unidas Podemos y especialmente en coordinación con los sindicatos, que desde el primer momento se han manifestado claramente indignados con estas declaraciones que han sido entendidas como una auténtica provocación por emitirse apenas unos días después de cerrarse un complejo proceso de construcción de los acuerdos del Pacto de Toledo. Sin duda alguna en el fondo del enfrentamiento se encontraba el plazo perentorio de envío a la Unión Europea del programa de Reconstrucción para la aplicación de los fondos recibidos por España y acordados por la UE. Con estas declaraciones se pretendía incluir en el documento enviado unos modelos de reforma del sistema

de pensiones contrarios a lo aprobado en el Pacto de Toledo, así como propuestas laborales que de hecho impidieran las medidas para dejar sin efecto las anteriores reformas laborales. Finalmente, la presión sindical y el trabajo político realizado en el Consejo de Ministros por Unidas Podemos, así como desde este espacio político, ha permitido que la propuesta del plan enviado a las instituciones europeas mantenga las recomendaciones adoptadas por el Pacto de Toledo, así como las propuestas del Ministerio de Trabajo de reforma laboral, por lo que ha fracasado el último intento de dejar sin efecto los contenidos del acuerdo del Gobierno de coalición en esta materia.

## **VI.- La exitosa estrategia de aprobación de los PGE y próximos retos**

En los últimos seis meses han sido numerosos los debates que hemos mantenido en el Partido, en Izquierda Unida y en el espacio Unidas Podemos respecto a la estrategia más adecuada para conseguir la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado expansivos que permitieran llevar adelante las medidas contenidas en el acuerdo de coalición y fundamentalmente que dejarán atrás los presupuestos de la austeridad y los recortes del ministro Montoro. Los intentos por parte del Partido Socialista de incorporar a Ciudadanos al bloque de apoyo político al Gobierno de coalición, complicaba la viabilidad y el mantenimiento del Gobierno de coalición toda vez que alejaba las posibilidades de participación de las fuerzas de la izquierda nacionalista especialmente las fuerzas catalanas como Esquerra Republicana de Cataluña, a la vez que suponía un reforzamiento de los sectores neoliberales del Partido Socialista.

El PCE se ha manifestado a favor de la estrategia de exclusión de ciudadanos del pacto de gobernabilidad, aunque ello a veces ha supuesto incluso cierto debate con las organizaciones sindicales que en un primer momento optaban por priorizar el cierre de cualquier pacto político que permitiera la aprobación de unos nuevos presupuestos generales del Estado. Finalmente, este objetivo ha sido alcanzado si bien para ello hemos tenido que mantener innumerables discusiones públicas y confrontaciones con nuestro socio de Gobierno. Pero hemos ampliado la mayoría de apoyo al Gobierno y a la vez hemos aprobado unos presupuestos que incorporan partidas de clara expansión del gasto público para el mantenimiento del escudo social. Nuestro Partido debe felicitarse porque la estrategia política por la que hemos optado ha ido dando buenos resultados, si bien es cierto que para ello ha sido necesario mantener permanentemente una confrontación y debate político en el seno del Gobierno que a la vez hemos hecho compatible con mantener la cohesión del Gobierno hacia el exterior frente a las agresiones de la derecha extrema y la ultraderecha. No podemos obviar que una vez conseguida estabilizar un amplio bloque de apoyos parlamentarios al Gobierno de coalición, con ocasión del posterior debate sobre la ley de eutanasia hemos podido incluso ampliar la mayoría parlamentaria para la aprobación de una ley tan importante como esta, aprobada con una brutal oposición de la iglesia, la ultraderecha y la derecha más extrema y que significa el nacimiento de un nuevo derecho.

Esta coyuntura nos permite asumir dos importantes retos políticos que el PCE debe impulsar de inmediato, ambos en cumplimiento de los contenidos del programa de gobierno de coalición. La aprobación de una reforma legislativa del voto rogado, esto es del voto en los procesos electorales en España de las

personas de nacionalidad española que viven en el extranjero acabando con las dificultades y discriminaciones existentes para impedir su voto. Y una reforma urgente del código penal que elimine los delitos de libertad de expresión, intentado que esta reforma se impulse lo más pronto posible para impedir el ingreso en prisión de cualquier condenado por estos hechos, aunque la justicia ordene su encarcelamiento.

Finalmente, este Comité Central entiende conveniente dar un nuevo impulso a la estructuración del espacio político de Unidas Podemos, tras los avances realizados con el trabajo de nuestro Partido conforme a lo acordado en nuestros órganos. En los últimos meses se han regularizado las reuniones de la Mesa Confederal de Unidas Podemos, se ha iniciado la coordinación del trabajo sectorial conjunto, y se ha iniciado un proceso de reuniones periódicas conjuntas de las direcciones políticas de las distintas fuerzas del espacio. Pero es necesario trabajar en dar un nuevo impulso de estructuración del espacio político, aprobando protocolos y normas de funcionamiento que impulsen el funcionamiento de Unidas Podemos y las relaciones entre las distintas fuerzas que lo componen. Acordamos realizar una próxima reunión de los órganos de dirección del PCE para analizar detenidamente esta cuestión, la situación del proceso de construcción de Unidas Podemos en cada territorio y las medidas a proponer para resolver los desencuentros y problemas de funcionamiento conjunto. Para ello, las organizaciones territoriales del PCE prepararan previamente un informe sobre el estado de la cuestión en cada territorio y las medidas concretas que se proponen atendiendo al conocimiento de las distintas realidades territoriales.

## **VII.- El mantenimiento y extensión del escudo social**

El pasado mes de diciembre el Consejo de Ministros aprobó un decreto que incluye dos medidas fundamentales para las familias: la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y la prohibición de los cortes de suministros hasta el final del estado de alarma. Se suspenden de esta forma los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables con motivo de impago del alquiler y también se suspenden los desahucios de familias vulnerables con menores, personas dependientes y víctimas de violencia machista que residan en viviendas de grandes tenedores -bancos, fondos de inversión y propietarios de más de 10 viviendas- aunque no tengan título habilitante. En todos los casos, para poder ejecutar un desahucio de una persona o familia vulnerable, las CCAA tendrán que ofrecer obligatoriamente una alternativa habitacional, que no podrá ser un albergue o un polideportivo, sino una vivienda digna.

También han quedado prohibidos los cortes de luz, agua y gas natural para consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, durante el estado de alarma, mediada que se aplicará a los titulares del contrato y a aquellas personas que no puedan demostrar la titularidad pero que reúnan los requisitos de vulnerabilidad.

Otra importante medida de fortalecimiento del sistema de atención a dependientes se adoptó el pasado 18 de enero, cuando el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 puso en marcha, de forma coordinada con

las CCAA, el Plan de Choque de Dependencia. Se trata de una financiación de hasta 3.600 millones de euros para ampliar el sistema de cuidados a personas dependientes y por fin garantizar los servicios y prestaciones a que tienen derecho por ley para garantizar que por fin el denominado cuarto pilar del Estado del bienestar sea una realidad.

No cabe duda de que está resultando difícil la ampliación y el mantenimiento de un Escudo Social sólido, como hemos tenido ocasión de ver en torno al debate y las discusiones para mejorar el ingreso mínimo vital. En todo caso esta medida, aunque no es la que nos habría gustado aprobar y sin duda es manifiestamente mejorable – por ejemplo, son cuestionables las compensaciones a los propietarios – es un paso más para ayudar a que miles de familias puedan pasar este invierno con algo más de seguridad y de dignidad. Su aprobación nuevamente ha sido posible debido al empeño y la presión realizada desde el espacio Unidas Podemos para avanzar hacia el fin de los desahucios sin alternativa y también de los cortes de suministros a personas vulnerables. La tarea ahora es conseguir que los movimientos sociales que defienden el derecho a la vivienda digna la hagan suya y contribuyan a mejorarla tanto durante el estado de alarma como para conseguir que se mantenga una vez finalizado este.

También destacamos el esfuerzo realizado por Unidas Podemos por poner en marcha medidas de igualdad, atención a situaciones de vulnerabilidad, contra la violencia de género y contra la discriminación de las mujeres, tanto desde nuestro espacio político como desde el Ministerio de Igualdad. Por dicho motivo, el Ministerio de Igualdad está soportando constantes ataques y descalificaciones, desde los sectores más reaccionarios, pero también sorprendentemente desde sectores del movimiento feminista en algunos casos, que no asumen su pérdida de influencia en el diseño de las políticas de Igualdad en España. El PCE manifiesta su apoyo al trabajo realizado por el Ministerio de Igualdad del gobierno de coalición y manifiesta su compromiso con continuar impulsando las políticas de igualdad que pongan fin a todas las discriminaciones que sufren las mujeres.

Hacemos un llamamiento para comenzar a organizar las inminentes movilizaciones del 8 de marzo, garantizando su éxito conforme a las condiciones que posibilite el Estado de la pandemia.

**VIII.- La elecciones en Cataluña.** Las elecciones autonómicas catalanas están convocadas a fecha de hoy para el próximo 14 de febrero, a pesar de que la situación provocada por la pandemia ha sido utilizada como justificación por el actual Gobierno de la Generalitat para intentar retrasarlas, una vez convocadas, hasta finales del próximo mes de mayo. Este intento de retraso ha coincidido con el anuncio de que el actual ministro de sanidad Salvador Illa, será el candidato del Partido Socialista de Cataluña a la presidencia de la Generalitat.

El Partido Comunista de España defiende que desde el momento en el que se elige un candidato a encabezar la lista electoral que concurre a unas elecciones, éste debe cesar en cualquier cargo institucional que ostente, y ello con el fin tanto de dedicarse a la campaña electoral como de evitar cualquier

utilización indebida de recursos públicos para favorecer a un determinado partido político. A fecha de hoy se desconoce la fecha de celebración exacta de las elecciones catalanas puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido el decreto que aplazaba la convocatoria de elecciones hasta el 30 de mayo, manteniendo cautelarmente la fecha inicialmente prevista del 14 de febrero como fecha de celebración de las elecciones.

Somos conscientes de que estas elecciones autonómicas suponen un importante reto político para nuestro partido, para Izquierda Unida y para todo el espacio de Unidas Podemos, puesto que son las primeras en celebrarse después de las autonómicas en Galicia y en el País Vasco, en las que -como ya hemos analizado en los órganos de dirección- se produjo un sensible retroceso de las candidaturas de Unidas Podemos respecto a los resultados anteriores en cada uno de esos territorios, especialmente en el caso de Galicia donde desaparecimos del parlamento regional.

Hemos concluido en distintos análisis que el ciclo electoral iniciado en el año 2019 ha coincidido con un importante periodo de descenso de la capacidad de movilización social y un importante agotamiento popular después de prácticamente una década de importantes niveles de confrontación política en nuestro país en torno a la pugna por el modelo de salida a lo que hemos denominado la crisis del régimen. En ese contexto también la izquierda alternativa, representada por el espacio de Unidas Podemos fundamentalmente, ha ido sufriendo esa desmovilización y debilitamiento.

Sin duda, el retroceso electoral experimentado fue mayor de lo esperado, y hemos analizado que en buena medida se ha debido también a la falta de consolidación y organización del espacio político confederal y las dificultades para el trabajo conjunto entre las distintas fuerzas políticas que lo componen.

En el caso concreto de las elecciones en Cataluña, a los anteriores factores se añaden de forma determinante las características propias de un proceso electoral celebrado tras un ciclo de intento conflictivo nacionalista. La legislatura autonómica a qué hora acaba ha estado marcada por el conflicto independentista y una marcada situación de enfrentamiento entre la derecha centralista y las fuerzas independentistas, tanto de centro derecha como de izquierdas -con su correlato de traslado del enfrentamiento político al resto del Estado. Este conflicto como sabemos ha dejado a nuestro espacio político en Cataluña en una compleja situación, al mantener una posición claramente diferenciada de ambos bloques en conflicto defendiendo un modelo de Estado republicano federal en el que Cataluña sea parte de un proyecto común junto al resto de pueblos de España.

El Partido Comunista de España ha trabajado para que en Cataluña desaparezca el eje de confrontación nacional y se sustituya por un debate político de modelos económicos y sociales, es decir por un eje de confrontación de clase donde los intereses y propuestas de la clase trabajadora puedan hacerse hegemónicas entre las distintas fuerzas políticas que se identifican con la izquierda, una izquierda que en Cataluña sin duda alguna debe defender, además de los derechos de la clase trabajadora, los derechos del pueblo

catalán y la construcción de un estado republicano federal donde el pueblo de Cataluña se relaciona con normalidad con el resto de pueblos de España.

Creemos que las elecciones deben mantenerse para el próximo 14 de febrero adoptando las medidas apropiadas para que el ejercicio del derecho democrático al voto se realice con las debidas garantías para evitar mayor propagación de la pandemia. No obstante, al margen de la fecha en la que finalmente se produzcan las elecciones, el Partido Comunista de España trabajará en el seno de Izquierda Unida para fortalecer las candidaturas de En Común, posibilitar los mejores resultados electorales posibles y así comenzar a frenar y ojalá que a invertir, la tendencia de retroceso electoral que hemos vivido. También nuestro apoyo debe servir para fortalecer las opciones de obtener representación parlamentaria de los compañeros y compañeras de Esquerra Unida Catalunya, para lo cual nos ponemos enteramente a disposición de esta organización y de todo el espacio de En Común.

**IX.- El Centenario del PCE.** Se inicia el año del centenario del PCE. Una oportunidad para el reforzamiento y la visibilización del partido. El 6 de febrero se celebrará el acto público con el que se da comienzo el programa de actividades. Las limitaciones de movilidad y aforo impiden realizarlo en un formato presencial, lo que nos impone un esfuerzo redoblado para que sea un éxito y tenga el mayor impacto posible. A partir de esta fecha se iniciará la programación territorial. Es importante que tengamos en cuenta las indicaciones y los materiales que ha preparado la comisión preparatoria del centenario y la secretaria de comunicación, con la finalidad de llegar con más fuerza y eficacia al conjunto de la sociedad. El proyecto de documental ha tenido una gran acogida, superándose en pocas semanas la previsión de recaudación, lo que prueba el interés y el potencial de la celebración. Las condiciones difíciles que estamos viviendo nos obligan a utilizar fórmulas telemáticas mientras las actuales circunstancias se mantengan, lo que no debe ser un obstáculo para trabajar en todas las actividades programadas.

#### **X.- Apoyo del PCE a la candidatura mayoritaria asamblea IU**

En apenas tres meses se realizará la asamblea federal de Izquierda Unida donde debatiremos entorno al papel de este movimiento político y social en los próximos años, respecto a su funcionamiento, y por supuesto respecto a su contribución a fortalecer y extender el espacio de Unidas Podemos como un espacio político estable y participativo.

El trabajo que estamos realizando, en función del mandato del Comité Central, para la preparación de la Asamblea de IU, ha permitido tener en este momento un amplio consenso en los documentos políticos y organizativos en el sentido de desarrollar elementos de Movimiento Político Social, en coherencia con la propuesta de documento político presentado para el debate en IU por la mayoría federal.

Esto se refleja, entre otras cuestiones, en la defensa de un esquema de responsabilidades de coordinación y acción, en lugar de secretarías de un modelo de Partido Político, así como en mantener los elementos que se han desarrollado en este periodo para la evaluación periódica del trabajo realizado.

También hay amplio acuerdo en potenciar la federalidad como el pilar territorial del Movimiento Político y Social que creemos debe ser IU.

Por último, hay un amplio acuerdo en resumir y concretar las propuestas que se plantean sobre el desarrollo de la política de alianzas en un formato de llamamiento que junto a la Declaración Política formen la proyección de la Asamblea Federal hacia el exterior al tiempo que de seguridad hacia el interior.

Desde estos postulados se acuerda que el PCE defenderá en todos los niveles del proceso asambleario el documento aprobado por la Coordinadora Federal de Izquierda Unida y coordinará las posibles aportaciones que se puedan presentar en el proceso asambleario para integrarlos en la ponencia, al tiempo que trabajaremos en el ámbito de la mayoría federal en la configuración de la candidatura que encabece Alberto Garzón.

El Comité Central acuerda que las aportaciones que surjan en las organizaciones del PCE y se quieran presentar a los documentos de la Asamblea Federal, se trasladen previamente a la Comisión del PCE para su coordinación y darles coherencia con los acuerdos del Partido

Se mandata a la Comisión Política para valorar las propuestas que presente la Comisión del Partido de preparación de la Asamblea Federal de IU, y para aprobar las aportaciones que el PCE realice en la Asamblea

Por todo lo anterior, el PCE estamos trabajando, junto a las organizaciones territoriales y los camaradas que tienen responsabilidades en la Dirección Federal de IU y la mayoría de IU para configurar la próxima dirección. En este momento estamos consiguiendo un amplio acuerdo en la composición de la Coordinadora y las Responsabilidades de la Colegiada, aunque faltan todavía por concretar algunos elementos que completen nuestra aportación al organigrama de IU, de manera que se permita la visibilidad tanto la máxima dirección del PCE en la dirección de IU como la implicación del Partido en las tareas de dirección de IU.

Al Partido le corresponde elegir una delegación de 69 personas. Proponemos que una vez finalizado el proceso en las federaciones de IU acordemos dicha delegación incluyendo a los miembros del CC que no hayan sido elegidos/as en sus organizaciones completándola, si fuese necesario, con las/os camaradas que las organizaciones territoriales indiquen. Se propone asimismo que el CC delegue en la Comisión Política la aprobación definitiva de dicha delegación.

Madrid, 30 de enero de 2021